

El futuro de Europa: ¿qué Europa?

Con el título "What Kind of Europe" Reginald Dale ha publicado una serie de tres artículos en el "Herald Tribune" de los días 21, 22 y 23 de Marzo. A continuación se ofrece una síntesis de los mismos.

Mientras los doce países de la CEE se preparan conjuntamente para el próximo mercado único, lo cierto es que continúan muy divididos a propósito de hasta qué punto la supresión de las fronteras económicas internas ha de conducirles a las uniones monetaria y política.

La resistencia británica a la integración monetaria hace aparecer de nuevo el espectro de una "Europa de dos velocidades", en la que algunos países avanzarían más deprisa que otros hacia el objetivo de someter sus economías y sus monedas a un control común.

Altos funcionarios británicos se resisten firmemente a admitir la posibilidad de que su país se quede una vez más atrás, como fué el caso en los años 50 cuando seis países continentales europeos crearon la Comunidad sin esperar a una dubitativa Gran Bretaña. Pero observadores y altos directivos de Bonn, París y Bruselas -y algunos también de Londres- aseguran que existen de nuevo presiones políticas para que se avance hacia la unión monetaria con o sin participación británica.

Los países del continente tienden a pensar que sólo poniendo sus soberanías en manos de instituciones conjuntas conseguirá Europa asegurar el control de su destino en un mundo en el que las relaciones de poder cambian rápidamente. Hace pocos días, el mismo Giscard d'Estaing reflejaba un sentimiento bastante generalizado al decir que si no puede conseguirse un acuerdo con Gran Bretaña sobre el tema monetario, los otros once debían llevar adelante su propio proyecto. "Si Francia y Alemania consiguen ponerse de acuerdo, el Reino Unido seguirá más pronto o más tarde", ha dicho por su parte Edith Cresson, ministro francés para Asuntos Europeos.

El tema alcanzará un punto álgido cuando, próximamente, en

Junio, el informe del comité Delors sobre la unión monetaria sea sometido a los 12 países miembros en la reunión de Madrid.

Algunos observadores creen que aún puede evitarse la división abierta, pues si bien las diferencias entre Londres, París y Bonn son profundas, no debería resultar imposible conseguir un compromiso. Además, ya existe una "comunidad de dos velocidades" en algunas áreas. Así, v.g., Gran Bretaña, España, Grecia y Portugal siguen fuera del mecanismo de cambios europeo. Así, también, España, Portugal, Grecia e Irlanda han quedado de momento libres de la obligación de liberalizar los movimientos de capital a partir del 1 de Julio de 1990. Y lo que es tal vez más importante, de conformidad con el acuerdo Schengen, de 1985, Francia, Alemania y el Benelux se proponen abolir los controles en las fronteras existentes entre ellos a partir de primeros del próximo año.

En definitiva, se ha de pensar que las decisiones serán políticas. En este sentido debe creerse que Mitterand y Kohl se mostrarán más dispuestos a optar por la gran visión de Europa que la Sra. Thatcher, si bien es difícil prever cómo se puede traducir esto en la realidad concreta.

También es esencialmente político otro gran tema en discusión: el que se conoce con el nombre de "dimensión social" del mercado único.

Desde hace algún tiempo, la necesidad de un código uniforme de normas laborales, así como de un compromiso para aplicar una política social común, se han convertido en artículo de fe para la mayoría de los países miembros, con una excepción: la de la Gran Bretaña de la Sra. Thatcher.

La campaña a favor de una "Europa social" ha sido protagonizada ante todo por Jacques Delors, y ha merecido el apoyo, entre otros, de François Mitterand, que ha situado este tema, junto con el de la unión monetaria, en el primer lugar del orden del día de los trabajos de la Comunidad para los seis meses de presidencia francesa que han de empezar el día primero de

Julio próximo. Francia contará en esta ocasión con el apoyo decidido de España y de Grecia, en el sur, y de Alemania y Dinamarca, en el norte. Para la Sra. Thatcher, en cambio, la "dimensión social" no es más que "socialismo que nos llega por la puerta trasera". Según Gran Bretaña, si el empresariado europeo ha de soportar el peso adicional de nuevas reglamentaciones sociales como las que la Sra. Thatcher a tardado 10 años en eliminar en su país, se habrán suprimido de golpe todas las ventajas que el mercado único habría de suponer desde el punto de vista de la productividad.

Con el entusiasmo del público por 1992 en curso de rápido enfriamiento, gobiernos como el de Mitterrand entienden que es necesario un compromiso en favor de una "Europa social" para convencer al ciudadano medio de que el mercado único le será beneficioso; que sus puestos de trabajo y su nivel de vida serán protegidos hasta el fin. Europa, ha dicho Pierre Bérégovoy, "es el único continente que ha conseguido conciliar el desarrollo económico, la democracia política y una fuerte solidaridad social. Esto último nos distingue de Estados Unidos".

Sin embargo, según han mostrado recientes encuestas en Francia y en otros países, el proceso hacia un mercado común corre el peligro de adquirir una imagen plenamente capitalista, de algo que sólo beneficiará a las grandes empresas. Concretamente en Francia, según una consulta de opinión publicada hace poco en "Le Monde", el 55% de los preguntados creía que el mercado único beneficiaría a los altos directivos empresariales, mientras que sólo el 36% pensaba que sería positivo para los trabajadores.

Otros gobiernos socialistas de la Comunidad tales como los de Grecia -emplazado ante unas difíciles elecciones- y de España -acusado por los sindicatos de desviacionismo hacia la derecha- tienen motivos poderosos de tipo interno para mostrar que no se desentienden de la suerte de los trabajadores. "En todos los países, la 'dimensión social europea' ha entrado a formar parte del juego político interno".

En Alemania, donde el canciller Kohl ha de enfrentarse también con unas delicadas elecciones el año próximo, los problemas a este respecto son tanto políticos como económicos. Existe, en efecto, un temor generalizado de que si las prácticas sociales no se uniformizan en toda Europa se producirá un trasvase de recursos de los países con sistemas sociales y asistenciales avanzados, como los de Alemania y Dinamarca, hacia países como España y Portugal, en los que las leyes sociales son menos limitativas y menos caras. Este fenómeno, conocido como "dumping social", es objeto de ruidosa atención por parte de los sindicatos alemanes, así como de la oposición socialdemócrata. Por esto el objetivo alemán no es sólo salvaguardar el nivel laboral y social alcanzado, sino conseguir que otros países menos avanzados alcancen los niveles alemanes. Un portavoz de los socialdemócratas sostiene, por ejemplo, que las normas de la CEE deben exigir específicamente que no podrá realizarse ninguna labor si no existe un contrato, y que cada empleo debe ir acompañado del correspondiente seguro social.

De todos modos, nadie pretende ni puede pretender que se produzca una uniformización a corto plazo, en este campo. Por el momento, Delors ha seleccionado ciertas prioridades: la redistribución de recursos hacia los países menos favorecidos de la CEE a través de los fondos de ayuda estructural; unos standards mínimos para la salud y la seguridad; el estatuto de los trabajadores ("social charter"), etc. La mayoría de estos puntos no suscita oposición alguna entre los países miembros. Otros, en cambio, sí. Tal es el caso del estatuto de las sociedades ("company statute") y del estatuto de los trabajadores, objetados por Gran Bretaña. El primero prevé la consulta de los trabajadores por parte de la dirección antes de la adopción de decisiones importantes. Ahora bien, "si hay una idea que la Sra. Thatcher no tolera es la presencia de los trabajadores en los consejos de administración de las sociedades". Tal vez sea por esto por lo que la Comisión dice ahora que el estatuto de las empresas será sólo voluntario.

Todas las concesiones que se han hecho, con todo, no han

sido suficientes para eliminar los recelos de Gran Bretaña ante el proyecto. Los temores se ven reforzados por el plan para un estatuto de los trabajadores, denunciado por los representantes británicos como "ingeniería social" ("social engineering") y que no sólo no es necesario sino que "no serviría más que para obstaculizar la buena marcha del mercado único".

Cada día existe mayor conciencia en los países comunitarios de que la combinación de la "perestroika" en el Este y la realidad próxima de un mercado único en el Oeste ofrece una oportunidad única para diseñar un nuevo mapa de Europa.

Especialmente en Bonn, pero también en París y en Bruselas, se piensa cada vez más que el "imán" comunitario podría y debería ser utilizado después de 1992 para atraer a los países orientales europeos hacia la órbita occidental. Los países comunitarios, sin embargo, están lejos de compartir un punto de vista uniforme en cuanto a la mejor manera de proceder con el Este, en especial debido a que no existe acuerdo entre ellos en cuanto a la durabilidad de los cambios políticos y económicos que se están produciendo en el Este. Alemania cree que no puede haber una vuelta a Brezhnev, mientras que otros estiman que esto es aún posible.

Sea como fuere, tales cambios están despertando en todos los países comunitarios la conciencia de que Europa no son sólo los 12 países de la CEE. La realidad, sin embargo, es que no existe una actitud común frente al problema del Este. Las actuaciones se producen de una forma individual y descoordinada, en especial por lo que se refiere a la competencia que se ha desencadenado para ofrecer generosos créditos a la Unión Soviética.

Tampoco se ha avanzado mucho en Bruselas en el sentido de definir una posición comunitaria ante los países de la EFTA (Australia, Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia). Por su parte, éstos están llamando a las puertas de la Comunidad, pero no saben exactamente para qué. Estos países tienen ya un

acuerdo de libre comercio con la CEE, pero tienen que quedarse aislados cuando se llegue al mercado único, que supondrá el establecimiento de normas y de prácticas en las que los países de la EFTA no habrán tenido ninguna intervención.
